



[Printable version](#) | [For free subscription](#) | [Previous issues](#)

also available in [French](#), [Portuguese](#) and [Spanish](#)

## MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES Boletín Mensual - Número 193 - Agosto de 2013

### NUESTRA OPINIÓN

- [El Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles](#)

### HACIA EL 21 DE SETIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES: SEMILLAS DE RESISTENCIA

- [Indonesia: monocultivos de árboles destruyen tierras y medios de vida indígenas](#)  
Aquí en Indonesia, todo niño que ingresa a la escuela se familiariza con “Merauke” gracias a una canción patriótica titulada “Dari Sabang Sampai Merauke” (literalmente, de Sabang a Merauke, es decir desde el punto más occidental al más oriental de Indonesia). La canción habla de la unidad y la gloria de Indonesia a través de sus grandes y pequeñas islas que se extienden desde Sabang, el punto más al oeste, hasta Merauke, el situado más al este.
- [Filipinas: organizaciones indígenas desafían a compañías de palma aceitera de Palawan](#)  
Pocos lugares del Sudeste Asiático pueden igualar el renombre de Palawan, en Filipinas. En 1990, la UNESCO declaró toda la provincia “Reserva de la Humanidad y de la Biosfera”. Hoy en día, además del impacto adverso de las minas de níquel, los pueblos indígenas locales y los agricultores de las llanuras se ven confrontados a las amenazas que plantea el desarrollo de la palma aceitera.
- [Camboya: la maldición de las concesiones](#)  
Desde el año 2000, los pobladores de más de 111 aldeas han estado luchando contra una gigantesca concesión de tierras que abarca 315.028 hectáreas y atraviesa las provincias de Pursat y Kampong Chhnang en Camboya. El acuerdo de la concesión autoriza a Pheapimex – una poderosa compañía camboyana – a apoderarse de tierras agrícolas, forestales y comunitarias para plantar monocultivos de acacia y mandioca.
- [Nigeria: Wilmar, RRDC y las plantaciones de palma aceitera de Calaro/Ibiae](#)  
Durante los últimos nueve meses, fuertes intereses se han enfrentado en el Estado de Cross River, hábitat de los últimos bosques tropicales primarios de Nigeria. La controversia se produjo en torno a las actividades de Wilmar International, una multinacional de Singapur que se describe a sí misma como “la mayor procesadora y comercializadora de aceite de palma y ácido láurico”.
- [Liberia: la expansión de las plantaciones y el saqueo de un continente](#)  
El gobierno ha concedido más del 50 por ciento de las tierras del país a plantaciones de caucho y palma aceitera, a la explotación maderera y a la minería. Los discursos sobre la adopción de

un enfoque favorable a los pobres para estimular el crecimiento del sector agrícola suenan a burla para los agricultores pobres a quienes se les despoja de sus tierras para dárselas a inversores extranjeros.

- São Tomé y Príncipe: voluntad popular pone freno a la expansión de las plantaciones industriales de palma

Habitantes de São Tomé se oponen a un acuerdo con la empresa Agripalma para la concesión de tierras e impidieron que el establecimiento de plantaciones industriales de palma aceitera en su isla destruyesen más de 1.000 hectáreas de bosque.

- Sudáfrica: la expansión de la industria celulósica y el acaparamiento de tierras disfrazado de desarrollo comunitario

Durante el Apartheid, muchos sudafricanos fueron despojados de sus tierras tradicionales por medio de leyes que provocaron su desplazamiento – a menudo por la fuerza – hacia zonas más pequeñas y remotas con un potencial agrícola marginal. Al mismo tiempo, el gobierno sudafricano de la época se apresuraba a convertir las tierras que arrebató a las comunidades rurales en vastas plantaciones industriales de árboles exóticos con el fin de respaldar a la industria celulósica y papelera, lo cual permitiría disminuir la dependencia de productos importados y el riesgo de sanciones de tipo comercial.

- Brasil: el monocultivo de eucalipto en el sudoeste bahiano - conflictos y enfrentamientos

El interés por el agronegocio forestal en la región del sudoeste de Bahía data del período de la crisis del monocultivo de café, que comenzó en los últimos años de la década de los 80 y se profundizó en los años 90 con la caída del precio del costal y la disminución de la superficie plantada en la región “Planalto da Conquista”.

- La RSPO denunciada en Honduras y Alemania

Del 6 al 8 de agosto, activistas ambientales y sociales condenaron la IV Conferencia Latino Americana de la RSPO - Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federación de Industriales Productores de Palma de Aceite. En Alemania, activistas de organizaciones ambientalistas y por los derechos humanos manifestaron contra el maquillaje verde que la RSPO ofrece a las plantaciones de palma aceitera a gran escala, durante dos encuentros de alto perfil realizados el 2 y 3 de setiembre en Berlín.

- Brasil: los incentivos del gobierno estadual a la expansión del monocultivo de árboles en el estado de Río de Janeiro

El gobierno del estado de Río de Janeiro ha adoptado, desde 2001, diversas iniciativas para estimular la expansión de los monocultivos de árboles en gran escala en el territorio del estado. Según parece, su intención es repetir en Río de Janeiro los desiertos verdes que asolan el norte de los estados de Espírito Santo, el extremo sur de Bahía, el norte de Minas Gerais, San Pablo, Paraná, el sur de Río Grande del Sur, y, más recientemente, diversas zonas de los estados de Maranhão, Piauí y Mato Grosso del Sur.

- Guatemala: el avance silencioso de los monocultivos de caucho

El cultivo de caucho se introdujo en Guatemala en 1940 por iniciativa del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América. Quince años más tarde, un primer censo de las plantaciones en el país reportó alrededor de 10.000 hectáreas. En 2003, el cultivo creció a 52.000 hectáreas; en 2012, había más de 100.000 hectáreas plantadas de caucho en la Costa

## RECOMENDADOS

- “Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará”
- “Agribusiness large-scale land acquisitions and human rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-Leste and Burma”
- “Who is benefitting ? The Social and economic impact of three large scale land investments in Sierra Leone: a cost benefit analysis”

---

## NUESTRA OPINIÓN

- El Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

¿Cuál es el sentido de otro Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, que se celebrará el próximo 21 de setiembre? Alguien podría cuestionar el porqué de tal Día, pues dichos monocultivos no paran de crecer en el mundo. ¿Existirá alguna forma de parar la expansión de los monocultivos de palma aceitera, de pinos, acacia, cauchero y eucalipto?

Es real que no existen fórmulas mágicas para detener el avance de estos monocultivos. En los lugares en los que las comunidades consiguieron parar o resistir el avance o inclusive recuperar territorios, se aplicó una mezcla de herramientas, dependiendo de cada situación, de cada contexto. Aún así, en todas las historias que condujeron a pequeñas y grandes victorias, muchas veces, surgen algunas acciones, algunas actividades claves, como la movilización, la unión y la organización que, conjuntamente, contribuyen al fortalecimiento real de la presión popular sobre gobiernos y empresas en escenarios generalmente muy desiguales. Si en verdad existe una “fórmula mágica”, seguramente incluye “ingredientes” fundamentales.

Es en este sentido que un Día de Lucha es otro de esos “ingredientes” muy importantes; busca fortalecer las luchas populares, su poder de presión. Es una propuesta legítima porque nació en un encuentro de alrededor de 200 personas de comunidades en lucha contra el monocultivo de eucalipto en Brasil en 2004. Dicha propuesta se transformó en un Día Internacional con la importante contribución de nuestro compañero y amigo Ricardo Carrere, quien, a pesar de no estar con nosotros, sigue inspirándonos con el entusiasmo y la pasión con la que siempre incentivó esas luchas contra los monocultivos de árboles.

Al plantear el Día de Lucha, las comunidades reunidas buscaron formas de fortalecer sus luchas de resistencia, de darles mayor visibilidad, además de tener un día para celebrar las reconquistas de territorios que deben ser recordadas siempre porque resultaron de luchas trabadas con mucho sacrificio. Son comunidades que luchan por sus territorios y contra el desierto verde, en conjunto, con algunos pocos aliados, pero que están, muchas veces, prácticamente solas en tales luchas y son perseguidas, criminalizadas por un grupo formado por policías, empresas, gobiernos, medios de comunicación y otros actores. Siempre se las acusa de oponerse al desarrollo y al “progreso”; un “progreso” que conlleva más exclusión, más violencia y más injusticias.

Es, entonces, un merecido Día para hacer que se preste atención a esas luchas y a las personas involucradas; para mostrar que, en realidad, se trata de una lucha únicamente de comunidades y

sus aliados en diferentes países y continentes- una lucha por territorio, por dignidad, por derechos. Además, el 21 de setiembre busca, principalmente, incentivar la solidaridad entre esas luchas. Un ejemplo son las acciones que en este mes el WRM estará realizando para apoyar luchas concretas de diferentes continentes y países, mediante cartas y otras manifestaciones de apoyo.

Estas luchas tienen un enorme valor; buscan defender territorios, la soberanía alimentaria, la conservación del bosque, la medicina natural, los valores, costumbres y economías tradicionales de una comunidad, con toda su riqueza. Es a partir de estas luchas que creemos que es posible construir otro mundo, siempre que tengan más visibilidad y logren articularse y fortalecerse cada vez más unidas.

Para una comunidad, conocer mejor la lucha de otras comunidades puede ayudar a aprender mejor su propia realidad, a reflexionar sobre las herramientas que pueden usarse para enfrentar y combatir amenazas como los monocultivos, y, principalmente, puede servir como inspiración y referencia, dar un nuevo aliento. Es de suma importancia divulgar informaciones y experiencias a aquellas comunidades que están comenzando a enfrentar empresas que ambicionan instalarse en sus territorios. Con este espíritu, elaboramos el presente boletín dedicado al Día 21 de setiembre.

Esperamos que la articulación de este Día sea un proceso cada vez más amplio y más permanente de articulación; que el conocimiento de que existen las mismas luchas en varios lugares sea una nueva motivación para que las comunidades busquen intercambiar sus experiencias y así fortalezcan el apoyo y la solidaridad mutuos.

[inicio](#)

---

## HACIA EL 21 DE SETIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES: SEMILLAS DE RESISTENCIA

- Indonesia: monocultivos de árboles destruyen tierras y medios de vida indígenas



Aquí en Indonesia, todo niño que ingresa a la escuela se familiariza con “Merauke” gracias a una canción patriótica titulada “Dari Sabang Sampai Merauke” (literalmente, de Sabang a Merauke, es decir desde el punto más occidental al más oriental de Indonesia). La canción habla de la unidad y la gloria de Indonesia a través de sus grandes y pequeñas islas que se extienden desde Sabang,

el punto más al oeste, hasta Merauke, el situado más al este.

Lamentablemente, hoy en día Merauke ya no es lo que era; ya no representa la unidad y la gloria sino la privación de los derechos de tenencia de los pueblos nativos, el temor ante los megaproyectos energéticos y la amenaza de la pobreza, todo ello entremezclado con la euforia de las corporaciones productoras de alimentos. Merauke ha ido cambiando de aspecto. Oficialmente, a comienzos de 2010 fue seleccionada por el gobierno nacional para convertirse en “un granero de alimentos y energía” para combatir la inseguridad alimentaria y las crisis energéticas del mundo.

El gigantesco proyecto para hacer realidad ese “granero de alimentos y energía” de Merauke se llama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate), e integra el cultivo de alimentos y la producción de energía. Unas 80 compañías, filiales de grandes grupos empresariales, han sido autorizadas a participar en él. Se han asignado al menos 2,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,2 millones se sitúan en zonas de bosque. El área designada abarca tres distritos (kabupaten): Merauke, Mappi y Boven Digul, 16 sub-distritos y 130 aldeas.

La producción estará destinada a los mercados internacionales para satisfacer la demanda mundial de alimentos y energía. Diversos productos básicos de origen agrícola han sido preparados y procesados por las corporaciones participantes, como la palma aceitera, la caña de azúcar, el arroz y los eucaliptos.

Aparte de la ambición, el hecho de ubicar un proyecto de tal envergadura y con utilización masiva de alta tecnología en medio de los pueblos de Merauke, que son sumamente dependientes de los “recursos naturales”, ha traído consigo numerosos problemas agudos y pluridimensionales. A los pueblos de Merauke se les están planteando rápidamente desafíos imposibles de resolver con los conocimientos que poseen.

El pueblo indígena Marind es nativo de Merauke y sus aldeas son las más numerosas. La tribu está compuesta por seis subgrupos: Kaize, Gebze, Balaigeze, Mahuze, Ndiken y Basik-basik. Han desarrollado un sistema interrelacionado y armonioso para el manejo de la tierra que comparten. Dividen el espacio en el que viven en “sitios sagrados”, “fuentes de agua”, “estanques de sago” (el sago es una especie de gusano que utilizan como alimento), “paradas de ancestros”, “viaje de ancestros” y “conservación de costumbres”. La tribu también utiliza nombres típicos para designar a sus bosques: llaman “Deg” a los bosques naturales antiguos que contienen grandes árboles, y “Mamoi” a los bosques naturales jóvenes que contienen árboles de tamaño mediano.

“En el pasado, nunca teníamos dificultades para conseguir carne, porque en Merauke había ciervos y canguros. En los pantanos había peces. Sin embargo, ahora nuestros terrenos de caza han sido convertidos en plantaciones de árboles; nuestros bosques de sago han sido talados y nuestros peces de pantano han desaparecido”, dijo J. (inicial del nombre de un organizador de las comunidades locales). “Esto empezó después de que las compañías llegaron a las aldeas y se comenzó a implementar el proyecto MIFEE”, añadió.

Un caso lamentable sucedió en la aldea de Zanegy, donde opera la compañía plantadora de árboles PT Selaras Inti Semesta (PT SIS). PT SIS es una filial del Grupo Medco, una corporación gigante productora de energía. Para la compañía que derribó los árboles en miles de hectáreas de tierras de los indígenas Marind, esos árboles no son más que “biomasa de madera”, y la madera fue enviada a su fábrica de pellets, PT Medco Papua Industri Lestari (PT MIL). Los pellets son utilizados como fuente de “energía renovable”. Entre los inversores del sector figuran las corporaciones internacionales LG y Y Han International, que promueven una “energía alternativa

respetuosa del medio ambiente”.

La aldea de Zanegy se encuentra río abajo de la plantación industrial de PT SIS. El río Sakau la atraviesa y es usado por los pueblos Marind de Zanegy para fines domésticos (higiene, bebida, etc.). “El agua tiene ahora un sabor diferente”, dijo un anciano de Zanegy. En la aldea, hubo niños que murieron de desnutrición. Incluso hoy en día hay muchos niños con cabeza desproporcionadamente grande, ojos secos, cuerpo demasiado delgado, estómago distendido y piernas débiles. También las enfermedades de la piel son frecuentes en la comunidad.

“La compañía sólo pagó indemnizaciones por la desaparición de los gusanos sago; nos engañaron”, dijo A.G. “La vida se ha vuelto cada vez más difícil, porque la calidad de los estanques de sago ha ido disminuyendo; los ciervos están desapareciendo desde que su hábitat se ha convertido en plantaciones de árboles”.

Los pueblos de Merauke están pagando las consecuencias de un modelo mundial injusto de producción y de consumo, que exige más alimentos y fuentes de energía “renovables” a expensas de la soberanía alimentaria de regiones enteras, y cuyo objetivo es mantener el nivel de ganancias de las empresas. Con el pretexto de satisfacer necesidades mundiales, el mega-proyecto terminará destruyendo la vida de los pueblos Marind de la región.

Las contradicciones inherentes al proyecto también son visibles en los distritos de Semangga y Kurik. El grupo PT Texmaco se dispone a establecer allí plantaciones de eucaliptos. La concesión abarca dos distritos y 7 aldeas. Lo irónico es que tal emprendimiento amenazará los arrozales locales, otro proyecto destinado a responder a la “demanda mundial de alimentos” que, ante todo, provocará la destrucción de las plantaciones locales de víveres.

El MIFEE es el reflejo del sistema de gestión globalizada de los alimentos y la energía, que amenaza con destruir los sistemas de supervivencia locales y, por consiguiente, provocar el hambre y la pobreza. También es típico de la expansión de corporaciones agroindustriales que se apoderan de la vida y terminan en tragedia para los pueblos indígenas y las comunidades aldeanas.

Fuente: YL Franky, PT. Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi: Rakyat Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan, 2013 (PT Medco está liquidando el bosque de la aldea de Zanegi: La comunidad es marginada y muere de hambre en graneros de víveres); Koesnadi WS, MIFEE Bukan Proyek Pangan, Laporan Perjalanan Dari Ujung Timur Indonesia Merauke, 2013 (MIFEE no es un proyecto de cultivo de víveres, Un viaje desde Merauke, el extremo oriental de Indonesia).

Rivani Noor, CAPP, correo electrónico: [rivani@cappa.or.id](mailto:rivani@cappa.or.id)

[inicio](#)

---

- Filipinas: organizaciones indígenas desafían a compañías de palma aceitera de Palawan



Pocos lugares del Sudeste Asiático pueden igualar el renombre de Palawan, en Filipinas. Contiene siete áreas protegidas, un “Refugio de Fauna y Santuario de Aves” declarado en 1967, y una “Reserva de Manglares” desde 1981. En 1999, la UNESCO declaró toda la provincia “Reserva de la Humanidad y de la Biosfera”.

Hoy en día, además del impacto adverso de las minas de níquel, los pueblos indígenas locales y los agricultores de las llanuras se ven confrontados a las amenazas que plantea el desarrollo de la palma aceitera. El grueso de las operaciones de palma aceitera es efectuado por las compañías Palawan Palm & Vegetable Oil Mills Inc. (PPVOMI) y Agumil Philippines Inc. Hasta el momento ya se han convertido unas 15.000 hectáreas en plantaciones de palma aceitera. El 75% de Agumil Philippines Inc. es de capitales filipinos, y el 25% de capitales malayos. En cuanto a PPVOMI, el 60% pertenece a Singapur y el 40% a Filipinas. Ambas compañías iniciaron oficialmente sus actividades en enero de 2006.

Según el gobierno provincial, el monocultivo de palma aceitera erradicará la pobreza y disminuirá la dependencia económica de los aceites comestibles importados. Sin embargo, desde el punto de vista de los pueblos indígenas locales, la expansión de la palma aceitera es una tragedia, dado que destruye sus tierras ancestrales y productos del bosque, lo cual los empobrece de manera sin precedentes.

Recientemente, los indígenas de Palawan decidieron tomar cartas en el asunto estableciendo lazos de solidaridad con las comunidades de Mindanao afectadas por la palma aceitera. Una importante reunión entre las comunidades de Higaonon y de Palawan tuvo lugar en Malaybaly (provincia de Bukidnon, Mindanao) el 21 y 22 de junio de 2013. Ésta fue facilitada por la red nacional ALDAW (Ancestral Land / Domain Watch) y por el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Padre Vincent Cullen Tulugan (FVCTLDC). De la reunión surgió una Resolución Conjunta de Palawan y Mindanao contra el desarrollo de la palma aceitera.

La llamada “Resolución de Malabalay” tuvo el apoyo de más de 100.000 firmas reunidas con la ayuda de la ONG alemana Salva la Selva, y fue presentada a las autoridades gubernamentales. Como resultado, el 7 de agosto se realizó en Palawan una reunión inter-agencias, en la oficina del Gobernador. En ella participaron todas las agencias gubernamentales provinciales involucradas, así como delegaciones de ONGs y de pueblos indígenas y campesinos.

Hacia el final de la reunión, cuando uno de los moderadores preguntó directamente si los participantes estaban a favor de una moratoria de la expansión de la palma aceitera, la mayoría respondió Sí. Las excepciones fueron, por supuesto, los representantes de las compañías de

palma aceitera y el Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible que, en el pasado, siempre tomó partido por las grandes empresas, inclusive por las corporaciones mineras.

A continuación tuvo lugar, el 28 de agosto, otra reunión inter-agencias sobre el mismo tema, en la oficina del Gobernador, con la participación de representantes de organizaciones de pueblos indígenas (ALDAW y NATRIPAL / Tribus Unidas de Palawan) y también de ONGs locales.

ALDAW y NATRIPAL presentaron sus conclusiones, según las cuales el desarrollo de la palma aceitera en Palawan ha tenido lugar sin supervisión alguna por parte de las autoridades competentes. Debido a esto, y al no existir mapas, es imposible para el gobierno determinar de manera sistemática la propiedad, la elevación, la clasificación del suelo, etc., de la zona en la que se están plantando palmas.

La presentación de ALDAW también señaló que se debería haber establecido un Equipo de Monitoreo Multipartito (EMM) para las plantaciones de palma aceitera de Palawan. Sin embargo, hasta ahora, después de más de siete años de actividades de plantación, las organizaciones indígenas y ONGs no tienen ningún dato sobre la composición del EMM ni de los resultados (si los hay) de las inspecciones realizadas en cada municipio afectado por la palma aceitera. Del mismo modo, no se ha suministrado información alguna a los miembros de la sociedad civil sobre los resultados (si los hay) de las actividades de supervisión del EMM referentes al impacto sobre el aire y el agua de la planta de procesamiento de aceite de palma, ni sobre el manejo y la eliminación de los desechos industriales y agrícolas por parte de PPVOMI-Agumil.

Refiriéndose específicamente al impacto del desarrollo de la palma aceitera sobre la biodiversidad, ALDAW también señaló que Palawan posee una de las últimas áreas contiguas de bosque de Filipinas. Las plantaciones de palma aceitera están rompiendo la contigüidad entre ecosistemas diferentes e interrelacionados, como el bosque de montaña, el bosque de llanura, la pradera, el humedal, etc., lo cual impacta a especies animales que se mueven y prosperan en diferentes nichos ecológicos, y afecta la integridad de cada nicho en particular.

Otro punto importante planteado en la reunión se refiere a los procedimientos por los cuales el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (DENR) otorgó a Agumil y PPVOMI Certificados de Autorización Ambiental. Los Certificados de Conformidad Ambiental son documentos que prueban que un empresario cumple las normas ambientales y estipulan las condiciones que debe respetar. Sin embargo, el DENR otorgó los Certificados de Autorización Ambiental sin que fueran observados los procedimientos adecuados y sin que Agumil y PPVOMI presentaran un informe técnico que demostrara el cumplimiento de las normas ambientales. Más aún, ALDAW señaló que Agumil y PPVOMI nunca habían recibido del DENR un "Permiso de Tala" y que, por consiguiente, habían violado el Código Forestal Revisado P.D. 705 de 1987, así como la legislación ambiental existente.

Contra la afirmación de Agumil, según la cual el desarrollo de la palma aceitera está contribuyendo a erradicar la pobreza, ALDAW presentó hechos contundentes. El Municipio de Sofronio Española es el que tiene el mayor porcentaje de tierras (más del 45%) cubiertas de plantaciones de palma aceitera y produce la mayor parte de la materia prima para la planta aceitera. Sin embargo, Española es un municipio de cuarta categoría. Según el censo de 2008 realizado por el Sistema de Monitoreo Comunitario, Española figura en último término en el Índice de Desarrollo Humano referente a Palawan. También es uno de los 100 municipios más pobres del país. Un informe de Social Watch de 2007 menciona que, en 2006, el índice de pobreza de Española era del 58%. Sofronio Española también tiene uno de los índices de malnutrición más altos de la provincia



(22,98%), según el responsable de la acción por la nutrición provincial.

Durante la reunión, el responsable de la Oficina Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PENRO) tomó decididamente posición contra Agumil. El Sr. Leonard Caluya de PENRO dijo a los representantes de Agumil: “calcularemos los daños que su compañía causó al bosque y los incluiremos en la demanda legal contra ustedes. Ustedes conocen nuestra política, y conocen sus propias limitaciones. Nosotros (DENR) nunca los autorizamos a talar árboles”. Recordó a la compañía la existencia de una moratoria nacional sobre la tala de árboles en los bosques residuales y que su oficina (PENRO/DENR) “seguirá cumpliendo con su mandato, con la ayuda de las ONG”. Según Caluya, es probable que, como forma de castigo, el DENR ordene a Agumil que elimine las palmas aceiteras ilegalmente plantadas en tierras forestales y que las reemplace por especies nativas.

Una buena noticia es que, como resultado de la presión constante generada por ALDAW sobre las autoridades gubernamentales de la provincia, diversas agencias están ahora movilizándose para realizar sus propias evaluaciones de campo sobre el impacto del desarrollo de la palma aceitera.

Hacia el final de la reunión, tanto los representantes indígenas como los de las ONG realizaron fuertes declaraciones categóricas. Datu Sangkula, del programa Non-Timber Forest Exchange, enfrentó a los representantes de Agumil y les advirtió que “el largo brazo de la ley los alcanzará, ya sea en lo penal o en lo administrativo”, y les recordó que “las violaciones de la ley IPRA (Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) conllevan responsabilidad penal y la compañía deberá dar explicaciones al respecto”.

Al final de la reunión, tanto los representantes de las ONG como de los pueblos indígenas confirmaron su pedido de moratoria sobre la expansión de la palma aceitera, al menos hasta que se disponga de datos científicos confiables sobre los beneficios reales obtenidos gracias al desarrollo de la palma aceitera comparados con sus costos no intencionales, como el aumento del dióxido de carbono (de las zonas desmontadas para las plantaciones), la pérdida del acceso tradicional a la tierra y los recursos, la disminución de la productividad de los suelos, la desaparición de los medios de vida tradicionales, etc.

ALDAW también declaró enérgicamente que es urgente que se realice un análisis serio de las plantaciones de palma aceitera existentes y proyectadas, para evaluar su situación ecológica actual y su superposición con las zonas aún conservadas y manejadas por la población indígena, y con las categorías de tierras de la ECAN (Red de Áreas Ambientales Críticas) previstas por la ley SEP. A menos que se realice dicho análisis, existe un alto riesgo de que se vean gravemente comprometidas la sostenibilidad ambiental y ecológica de la provincia, su productividad agrícola y la seguridad alimentaria de la población.

Ancestral Land/Domain Watch (ALDAW), correo electrónico: [aldaw.indigenousnetwork@gmail.com](mailto:aldaw.indigenousnetwork@gmail.com), <https://www.facebook.com/Aldaw.network.palawan.indigenous.advocacy>

[inicio](#)



La compañía prometió aumentar la cobertura forestal pero plantaron mandioca. La mandioca no es un árbol; una plantación de mandioca no es un bosque  
(Poblador de Ansar Chambor, Pursat, Camboya)

Desde el año 2000, los pobladores de más de 111 aldeas han estado luchando contra una gigantesca concesión de tierras que abarca 315.028 hectáreas y atraviesa las provincias de Pursat y Kampong Chhnang en Camboya. El acuerdo de la concesión autoriza a Pheapimex – una poderosa compañía camboyana – a apoderarse de tierras agrícolas, forestales y comunitarias para plantar monocultivos de acacia y mandioca. El Grupo Pheapimex, propiedad de Choeung Sopheap y su marido Lao Meng Khin, un senador del Partido del Pueblo Camboyano (PPC), actualmente en el poder, es considerado por muchos camboyanos como virtualmente intocable por las estrechas relaciones que existen entre sus propietarios y el Primer Ministro de Camboya, Hun Sen y por las importantes donaciones de Pheapimex al PPC.

Aunque la ley vigente limita el tamaño de cada concesión de tierras a 10.000 hectáreas, Pheapimex adquirió su permiso en 1997, antes de que fuesen establecidas las leyes que regulan las concesiones de tierras para el desarrollo de actividades económicas. Inicialmente su plan era establecer una plantación de eucaliptus y fábricas de celulosa y papel. Para este fin la empresa se asoció con el Grupo de Cooperación Agrícola de China y tramitó el financiamiento del Banco de Exportaciones-Importaciones de China. Pheapimex es también el socio camboyano de la compañía forestal china, Wizhishan. Desde la aprobación de la referida ley, Pheapimex colabora con intermediarios y otras compañías que adquieren tierras dentro de los límites legales, pero en realidad constituyen parte de la gigantesca operación de Pheapimex.

Para el año 2002, la compañía ya había empezado a talar bosques y ocupar tierras agrícolas, a construir carreteras y canales y a acondicionar un vivero en la comuna de Ansar Chambor, distrito de Krakor, en Pursat. Como protesta, los pobladores de la comuna bloquearon carreteras y elevaron denuncias al gabinete real en Phnom Penh, la capital del país. Aunque el gobierno nacional no respondió favorablemente, las protestas locales pararon los trabajos en Ansar Chambor durante un corto lapso. Sin embargo la compañía continuó delimitando, desbrozando y apoderándose de tierras en otras zonas. En el año 2008, el vivero de Ansar Chambor ya estaba en pleno funcionamiento y Pheapimex había empezado a desalojar a los pobladores de sus tierras en otras zonas de la concesión, impidiendo el acceso de la población local a los bosques, plantando mandioca y acacia e instalando campamentos de obreros.

Desde entonces las operaciones de la compañía se han extendido y acelerado y se está trasladando maquinaria pesada, tales como topadoras y excavadoras, a través de toda el área de la

concesión. Se nota claramente que esta expansión se está realizando por fases; sin embargo, las comunidades afectadas no reciben información previa sobre los planes de la compañía y a menudo son tomadas desprevenidas. La compañía se vale de distintos medios para asegurar la “cooperación” local, desde coimas y engaños hasta intimidación, violencia y encarcelación.

En el año 2010 Pheapimex organizó una ceremonia de “entrega de obsequios” en Ansar Chambor, en la que se entregaron arroz, fideos instantáneos y krumahs (pañoletas tradicionales) como testimonio de las buenas intenciones de la compañía. A continuación las autoridades gubernamentales alabaron los esfuerzos de Pheapimex por llevar prosperidad a la zona y ordenaron a las comunidades que cooperaran ya que eran las destinatarias de la generosidad de la compañía.

Las autoridades del distrito y de la comuna han informado a las comunidades afectadas que no pueden cuestionar o parar a Pheapimex, y que los pobladores deberían aceptar cualquier indemnización que quiera pagar la compañía. Pheapimex utiliza en forma rutinaria su propia seguridad privada armada, así como policía comunitaria armada y policía militar para “proteger” la propiedad de la compañía frente a las protestas locales. Aunque la policía local se identifica con las comunidades afectadas, tienen órdenes de proteger a la compañía y no a las comunidades

### Empobreciendo al pueblo

Antes de que instalaran la plantación, aún con 100 hectáreas de tierras agrícolas se podía sustentar a cientos de familias. Sin embargo ahora, se han entregado miles de hectáreas a una sola compañía y (este arreglo) ni siquiera da para alimentar a una familia adecuadamente.  
(Poblador de Psach Latt, Pursat, Camboya)

Los testimonios de las comunidades afectadas demuestran que la concesión de Pheapimex está robando al pueblo camboyano su patrimonio y riqueza natural, empobreciendo a las comunidades que están dentro de las áreas de la concesión y en los alrededores y eliminando las opciones de subsistencia de las generaciones futuras. Las áreas otorgadas a Pheapimex incluyen tierras agrícolas, de pastoreo, humedales, bosques, montes, lagos y cuencas, los que constituyen un sistema de infraestructura natural que nutren y de la que dependen los pobladores locales para su supervivencia y su bienestar cotidiano. Con la pérdida de tierras de pastoreo, las familias afectadas empezaron a vender sus vacas y sus búfalos, una de las importantes formas tradicionales de riqueza en Camboya.

La tala de bosques para la concesión está destruyendo la biodiversidad y los ecosistemas locales, incluidos valiosos bosques primarios, fuentes de agua, peces y vida silvestre. Están desapareciendo árboles económicamente valiosos (tales como los Knyung Beng, Neang Nun, Chheu Krom, Khnong y Phchek), la vida silvestre ha perdido hábitats, y las cuencas se han visto severamente reducidas. La compañía ha anegado estanques, cortado arroyos y desviado las aguas hacia sus viveros y plantaciones por medio de canales. Algunos arroyos se han secado por completo. Los pobladores locales temen que esto afectará la pesca local, particularmente en el Lago de Tonle Sap. Los ríos y arroyos aportan nutrientes a los peces y muchos de ellos viajan río arriba para desovar. Al bloquear arroyos y estanques, la salud y calidad integral de la pesca se deteriorará. La agricultura también se ha vuelto más difícil: los pobladores no pueden cultivar hortalizas y otros cultivos comerciales en sus huertas ya que la compañía domina el acceso al agua. Sin cobertura forestal, las aguas pluviales drenan más rápidamente, no se controla la erosión de los suelos y los pocos arroyos que quedan se vuelven más llanos.

Los bosques y montes constituyen importantes ‘alacenas’ de alimentos y medicamentos para las comunidades afectadas, así como fuentes de combustibles, materiales de construcción y productos forestales no madereros, tales como hongos, brotes de bambú y de ratán, miel, viñas, resinas, raíces, hierbas silvestres y frutas. Además los bosques tienen importantes valores culturales y religiosos para las comunidades afectadas: la compañía ha talado bosques sagrados, bosques de espíritus donde se realizan rituales tradicionales para pedir paz, buenas cosechas, prosperidad y salud. Las comunidades han perdido más de 6000 hectáreas de bosque, identificados como bosques comunitarios en Ansar Chambor y Kbal Trach (Pursat). Los pobladores de Kbal Trach estiman que la pérdida de ingresos sólo de los productos forestales no madereros para cada familia supera un millón de riel (US\$245) por temporada.

A medida que las familias aumentan de tamaño, las nuevas generaciones necesitan tierras para cultivar: estas tierras ya no están disponibles. Una iniciativa para conceder títulos de tenencia de tierras en y alrededor de las concesiones, iniciada por el Primer Ministro Hun Sen en 2012 (conocida como Directiva 01BB), estableció un tope de 5 hectáreas de tierras como huertas y arrozales respectivamente para cada adulto, aunque la cantidad de tierra con títulos es mucho menor en la mayoría de las aldeas afectadas por la concesión de Pheapimex. Aún este límite de 5 hectáreas ignora las necesidades de tierras de aquellos que todavía no son adultos, pero que llegarán a serlo dentro de unos años.

Sumidos en la desesperación, numerosos pobladores buscan empleo en las plantaciones, donde se pagan sueldos bajos – 600.000 riel o US\$147 por 30 días de trabajo –, los pagos son irregulares y en deficientes condiciones de trabajo. Hoy en día muchas de las familias deben subsistir con el sueldo de un integrante de la familia en la plantación, lo que no puede sustentar a una familia entera que antiguamente cubría su alimentación y percibía ingresos de los arrozales, las huertas, los bosques y arroyos. Como resultado, el endeudamiento aumentó, la emigración se incrementa y las familias se desintegran a medida que sus integrantes se van a las ciudades o a la vecina Tailandia en busca de trabajo.

Continuando con la lucha

Desde que se enteraron de la concesión, los pobladores de las comunidades afectadas han intentado defender sus tierras, bosques, subsistencia y vidas de distintas formas. Han protestado en las oficinas comunitarias, de distrito y provinciales, han cortado el tránsito de la Ruta 5 para concitar apoyo público, impidiendo que las máquinas limpiasen tierras agrícolas y bosques y han elevado quejas a las autoridades en todos los niveles. Han realizado ceremonias de oración pidiendo justicia en las comunidades, pagodas y frente a las oficinas públicas.

La movilización y organización popular en los ocho distritos abarcados por la concesión constituyen un enorme desafío para los pobladores locales, quienes simultáneamente están intentando alimentar a sus familias y cubrir sus necesidades. La concesión es gigantesca, no sólo en tamaño sino también en dinero y poderío político. Aquellas personas que protestan son tildadas de “incitadores”, arrestadas bajo falsas acusaciones, encarceladas y multadas con grandes sumas de dinero. Aunque muchas de ellas están exhaustas y desalentadas, otras ven una esperanza de cambio a largo plazo. Las recientes elecciones nacionales demostraron que existe una pérdida de apoyo general del PPC y es probable que la masa de las bases del PPC se esté debilitando en los lugares donde los conflictos de tierras y bosques son mayores.

En las palabras de un poblador de Krang Skea (Kampong Chhnang): Somos como el bambú que empieza con un brote, tenemos que esperar que haya más brotes y que el bambú crezca.

---

- Nigeria: Wilmar, RRDC y las plantaciones de palma aceitera de Calaro/Ibiae



Durante los últimos nueve meses, fuertes intereses se han enfrentado en el Estado de Cross River, hábitat de los últimos bosques tropicales primarios de Nigeria. La controversia se produjo en torno a las actividades de Wilmar International, una multinacional de Singapur que se describe a sí misma como “la mayor procesadora y comercializadora de aceite de palma y ácido láurico”. Dicha compañía ha sido criticada por una ONG de Calabar, el Centro de Recursos y Desarrollo del Bosque Tropical (RRDC) por lo que ésta considera como violaciones flagrantes a los derechos humanos y ambientales, así como de las leyes locales y nacionales.

Wilmar explota 19.712 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la zona de Calaro, Ibiae y Biase del Estado de Cross River, como parte de una empresa conjunta con PZ-Cussons. La compañía apunta a adquirir 50.000 hectáreas de tierras comunales para expandir sus plantaciones en ese Estado durante los próximos años. Las plantaciones fueron presentadas con bombos y platillos en noviembre de 2012. Hablando en nombre del Presidente Jonathan durante la ceremonia de inauguración, el Ministro de Agricultura, Akinwunmi Adesina, declaró que las plantaciones de palma aceitera de Calaro-Ibiae y Biase representaban “un importante jalón en el programa de inversión nacional que estimulará la diversificación económica...”.

Esos nobles deseos pasan por alto el costo real, humano y económico, de tal emprendimiento. Según el director ejecutivo de RRDC, Odey Oyama, los derechos de Wilmar sobre las tierras de Ibiae son discutibles, dado que la zona comprende tierras pertenecientes a agricultores locales. Igualmente crucial es el hecho de que, en las concesiones de Wilmar en el eje de Kwa Falls, la propiedad plantada con palma aceitera también está dentro de los límites de reservas de bosque establecidas: la división Oban Hill del Parque Nacional de Cross River y la Reserva de Ekinta.

En noviembre de 2012, RRDC protestó oficialmente ante la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Responsable (RSPO), acusando a Wilmar de haber comenzado a operar – sin respetar las condiciones legales referentes a la Evaluación de Impacto Ambiental – en tierras adquiridas sin cumplir con lo estipulado por la legislación en materia de uso de la tierra. RRDC también acusó a la compañía de varias otras irregularidades, como la falta de un acuerdo con las comunidades propietarias, la adquisición ilegal de tierras arrendadas al CARES (Plan de Desarrollo Agrícola y Rural del Estado de Cross River), y el incumplimiento de las leyes y reglamentos municipales

pertinentes.

RRDC señala que esas cuestiones atañen directamente a los principios básicos de la RSPO, de la cual es miembro Wilmar. En vista de esto, RRDC sugiere a la RSPO que exhorte a Wilmar a suspender sus actividades y a esforzarse por calmar las preocupaciones de las partes perjudicadas. En respuesta a las acusaciones de RRDC, Wilmar presentó a la RSPO un documento de cuatro páginas en el que niega las acusaciones de la ONG y declara que intentó resolver todos los problemas referentes a sus adquisiciones y operaciones en las propiedades de Cross River. Para RRDC, cualquier compañía privada que se instala en tierras comunales sin cumplir con las disposiciones legales está cometiendo una apropiación indebida. Wilmar no ha cesado de mencionar acuerdos con las comunidades indígenas, pero nunca presentó copia de ninguno de ellos. RRDC piensa que, en una democracia constitucional como la que existe actualmente en Nigeria, ninguna agencia gubernamental puede pasar por encima de los debidos procedimientos legales, ni otorgar garantías que equivalen a eximir a empresas privadas de la obligación de respetarlos.

Según los asesores ambientales de Wilmar, Ibara Environs Consultants, la compañía realizó en sus dos plantaciones las evaluaciones de impacto ambiental requeridas. En una carta sobre el tema publicada en noviembre 2012 por Ibara Consultants, el gigante del aceite de palma insistió en que “reconoce el valor y la importancia de manejar sus fábricas y plantaciones respetando las múltiples necesidades de la sociedad y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades y de disfrutar de los mismos recursos que hoy tenemos”. A pesar de la abundante retórica de Wilmar, RRDC alega que la compañía no posee ningún certificado auténtico de EIA y que no ha presentado pruebas de haber indemnizado a las comunidades locales ni copia de ningún boletín oficial donde figuren sus adquisiciones.

En enero de 2013, se organizó una reunión de las partes interesadas en el Ministerio de Justicia del Estado de Cross River, a la que asistieron una delegación del gobierno estatal, representantes de Wilmar, representantes de las comunidades indígenas y miembros de RRDC. De un modo u otro, la discusión se desvió de las cuestiones de fondo presentadas a la RSPO por RRDC, y el Director Ejecutivo de RRDC fue acusado de ser un hombre débil que no quiere que Wilmar tenga negocios en Nigeria (a pesar de que RRDC insiste en que Wilmar debe cumplir con la legislación y que de ahí se derive el conflicto).

### RRDC y Wilmar ante la justicia

Dado que durante la reunión del 15 de enero de 2013 las partes no lograron resolver los problemas planteados y presentados a la RSPO por RRDC, esta organización se vio obligada a dirigirse a un tribunal competente de la República Federal de Nigeria en busca de una interpretación apropiada. Además, RRDC afirma que nada permite pensar que la transferencia de tierras pertenecientes a los comités indígenas cumple con las leyes de la República Federal de Nigeria.

Durante las semanas siguientes a la reunión de enero, el Sr. Oyama sufrió un acoso sostenido de la policía de Calabar, que invadió su hogar forzando la entrada (y sin ningún tipo de orden judicial) el domingo 27 de enero de 2013. Debido al acoso policial, el Sr. Oyama debió ocultarse para estar a salvo, y su caso ha sido retomado por organizaciones internacionales de protección del medio ambiente, como Amigos de la Tierra Internacional (FoEI). El Sr. Oyama sostiene que el acoso policial contra su persona es consecuencia de su intervención judicial contra Wilmar y sus plantaciones de Calaro-Ibiae/Biase, y también de la posición de RRDC en cuanto a las plantaciones que Wilmar pretende emprender en el Estado de Cross River sin que nada indique que cumple con

la legislación local y federal.

En una carta fechada el 13 de marzo de 2013 y dirigida al Honorable Ministro del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Wilmar presentó finalmente 20 copias impresas del informe de EIA sobre las plantaciones de palma aceitera de Biase/Ibiae, fechado en junio de 2013, para ser analizado y presentado al público. Es evidente que las declaraciones hechas por los consultores de Ibara Consultants en nombre de Wilmar en noviembre de 2012 no eran verdaderas. Además, luego de los estudios preliminares realizados por RRDC también se ha vuelto evidente que el informe tiene numerosas carencias: por ejemplo, la página donde se supone que figura el mapa de la concesión está en blanco. Cabe preguntarse cómo es posible que un informe de EIA que no contiene el mapa de la zona de la concesión pueda ser auténtico.

Missang Oyongha, Rainforest Resource & Development Centre (RRDC), correo electrónico: [rainforestcentre@yahoo.co.uk](mailto:rainforestcentre@yahoo.co.uk)

[inicio](#)

---

- Liberia: la expansión de las plantaciones y el saqueo de un continente



“Los liberianos son más sanos, están mejor alimentados, tienen mayores ingresos, consumen más, están más alfabetizados y disfrutan de más libertad que nunca” (1), dice el gobierno de Liberia. También afirma que hay más liberianos que se están enriqueciendo y que se está reduciendo el desnivel entre ricos y pobres. Sin embargo, según el PNUD (2) el 84 por ciento de la población vive en estado de pobreza pluridimensional o sufre privaciones en materia de salud, educación y nivel de vida en general. En 2012, de los 186 países enumerados en el Índice de Desarrollo Humano, Liberia figuraba en el lugar 174. Más de dos tercios de la población están entre los más pobres del mundo, y la percepción general es que la desigualdad entre ricos y pobres continúa aumentando.

Las estadísticas del PNUD llevan a preguntarse por qué la mayoría de la población de Liberia es tan pobre, siendo que, como muchos países africanos, éste es tan rico en recursos naturales. Los factores responsables son numerosos pero los principales son la mala administración y el saqueo de los recursos del país que practican las élites y los políticos corruptos. Según la Coalición Internacional por la Tierra, “las malas decisiones en materia de tierras pueden generalizar y profundizar la pobreza, las desigualdades y la dependencia” (3).

Tomando como ejemplo el caso de la tierra, la introducción de cambios en las políticas y las prácticas contribuiría a revertir la situación en muchas partes de África. En lugar de tomar las tierras de los pobres para dárselas a corporaciones multinacionales, los gobiernos podrían ayudar a las comunidades a usar la tierra de manera productiva y rentable. Un modo de lograrlo consistiría en fomentar la inversión en la producción de alimentos con métodos de tecnologías sencillas pero eficientes.

Liberia, por ejemplo, “depende de la importación para obtener el 60 por ciento de los alimentos, de los cuales el arroz, alimento básico del país, representa el 65 por ciento” (4), y “el 81 por ciento de la población es muy vulnerable o medianamente vulnerable a la inseguridad alimentaria” (5). Para resolver este problema, dos de los tres grandes objetivos de la política agrícola del gobierno consisten en lograr que “se disponga en todo momento de alimentos seguros y nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de todos los liberianos” (6) y garantizar “un crecimiento inclusivo y favorable a los pobres en materia de producción y productividad agrícola, competitividad, valor agregado, diversificación y acceso al mercado” (7).

Evidentemente, la inversión en la producción de alimentos posee el potencial de mejorar el poder económico de la población, disminuir la pobreza, aumentar la soberanía alimentaria y estimular un crecimiento económico que conduzca a un desarrollo más equitativo e inclusivo. En lugar de eso, el gobierno ha concedido más del 50 por ciento de las tierras del país a plantaciones de caucho y palma aceitera, a la explotación maderera y a la minería. Los discursos sobre la adopción de un enfoque favorable a los pobres para estimular el crecimiento del sector agrícola suenan a burla para los agricultores pobres a quienes se les despoja de sus tierras para dárselas a inversores extranjeros.

Las experiencias en toda África muestran que el sistema actual de concesión no sólo despoja a la gente de sus tierras y altera sus medios de vida sino que crea condiciones que refuerzan la pobreza, la desigualdad y las injusticias. Esa situación intensifica las protestas contra el Estado y sus colaboradores empresariales, y se vuelve un terreno fértil para la violencia y los conflictos. Además, el modelo dependiente de las exportaciones es vulnerable a la fluctuación de los precios; cuando el precio de las materias primas baja, los países dependientes de sus recursos naturales suelen enfrentarse a peligrosos déficit presupuestales.

De más está decir que cuando los gobiernos africanos adoptan medidas económicas insensatas, las envuelven en un discurso político y las justifican diciendo que apuntan a crear empleos, a reducir la pobreza y a promover el desarrollo, van en contra de los intereses de sus ciudadanos. Cuando no cumplen con su responsabilidad de negociar acuerdos comerciales que garanticen el mayor desarrollo posible para la población, están traicionando la confianza de ésta. Los errores que cometen, dan lugar justificadamente a la exigencia popular de un liderazgo responsable.

El 21 de setiembre de 2013, agricultores, movimientos sociales y ONGs de toda África reclamarán una vez más a los gobiernos que implementen programas de desarrollo sólidos, que apunten a lograr un desarrollo más inclusivo y equitativo. Esa exigencia no será nueva, pero tendrá ahora un carácter urgente que antes no existía. Lamentablemente, cuando los habitantes del continente exigen poder opinar durante la negociación de contratos y recibir una parte justa de los beneficios generados por sus recursos, los gobiernos responden de manera agresiva.

En Uganda, una nueva ley impone ahora numerosas restricciones a las manifestaciones públicas, una herramienta utilizada por los activistas para luchar contra el acaparamiento de tierras. En Gabón, el ganador del Premio Ambiental Goldman ha sufrido acoso e intimidaciones que, según se dice,



se deberían a su posición contraria a la concesión de grandes extensiones de tierra a los promotores de plantaciones. En Liberia, dos oficiales gubernamentales de alto rango atacaron públicamente el Instituto del Desarrollo Sostenible (SDI) y lo acusaron de oponerse al desarrollo, por haberse opuesto a las violaciones de derechos humanos asociadas a la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Cuando se le pidió que justificara su intento de suspender una reunión ciudadana sobre la palma aceitera en la zona oeste de Liberia, el superintendente respondió que las ONG no estaban hablando de los beneficios que el desarrollo de las plantaciones iba a aportar al pueblo.

“Privar a los agricultores de sus tierras, destruir los bosques y rodear aldeas enteras de plantaciones de palma aceitera son acciones que no coinciden con nuestra visión del desarrollo en Liberia”, dice Nora Bowier, quien dirige el trabajo del SDI sobre la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Para ella, cuando el gobierno concede tierras de las que dependen las comunidades tradicionales, sin el consentimiento de éstas y sin una indemnización justa, está contraviniendo su deber de proteger a los ciudadanos contra la violación de los derechos humanos. Por otro lado, cuando las compañías de plantación de palma aceitera u otras, como Sime Darby y Golden Veroleum en el caso de Liberia, infringen los derechos de las comunidades, no pueden trasladar la culpa al gobierno, porque su responsabilidad es independiente de la del Estado.

A medida que se multipliquen esas plantaciones en el continente, advierten los activistas, los conflictos territoriales se generalizarán. “Es sólo una cuestión de tiempo que las cosas empiecen a desmoronarse para el Estado, para sus colaboradores empresariales y para las comunidades; nadie saldrá victorioso de esta situación”, concluye Nora.

NOTA: Una versión más corta de este artículo fue presentada a D+C Magazine, <http://www.dandc.eu> (Alemania).

(1) Socioeconomic Achievements of the Government of Liberia, 2006 – 2011, p. 9, Government of Liberia. Disponible en:

[http://s3.amazonaws.com/zanran\\_storage/www.mopea.gov.lr/ContentPages/2529148229.pdf](http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.mopea.gov.lr/ContentPages/2529148229.pdf)

(2) Human Development Report, 2013, UNDP: Disponible en:

<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/English/HDR2013%20Report%20English.pdf>

(3) Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project, 2012, p.9, International Land Coalition.

(4) Everyone Must Eat? Liberia, Food Security and Palm Oil, 2013, p.5, Columbia School of International and Public Affairs.

(5) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.1, Gobierno de Liberia.

(6) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.xii, Gobierno de Liberia.

(7) Food and Agriculture Policy and Strategy: from subsistence to sufficiency, sin fecha, p.xii, Gobierno de Liberia.

Por Silas Kpanan'AYoung Siakor, Sustainable Development Institute (SDI), e-mail: [sksiakor2005@gmail.com](mailto:sksiakor2005@gmail.com)

- São Tomé y Príncipe: voluntad popular pone freno a la expansión de las plantaciones industriales de palma



En uno de sus últimos trabajos - "Oil palm in Africa: Past, present and future scenarios", diciembre de 2010 -, nuestro querido compañero Ricardo Carrere brindó un panorama histórico y actualizado de los monocultivos de palma aceitera en África (ver en [http://wrm.org.uy/oldsite/countries/Africa/Oil\\_Palm\\_in\\_Africa.pdf](http://wrm.org.uy/oldsite/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.pdf), en inglés)

La palma aceitera ha sido un cultivo tradicional de numerosos países africanos, que, procesado artesanalmente, les ha servido para usos domésticos y locales, desde cestería hasta producción de vino (de palma), aparte del aceite extraído de la planta, que ha revestido gran importancia para la economía local.

No obstante, la demanda internacional del aceite de palma para la industria comestible, de cosmética y más recientemente para agrocombustibles, abrió una puerta grande a la expansión de plantaciones en gran escala de palma aceitera, impulsada por grandes empresas del agronegocio.

En el caso de São Tomé y Príncipe, la palma aceitera crecía naturalmente en las islas deshabitadas, pero su uso se remonta a la época de la invasión portuguesa, cuando los invasores introdujeron el cultivo de caña de azúcar a base de mano de obra esclava. Fue así que llegaron africanos de Benin, Congo y Angola, quienes trajeron consigo los usos tradicionales de la palma aceitera.

Posteriormente a la independencia de São Tomé y Príncipe, en 1975, con dineros del Banco de Inversión Europeo y de la Comunidad Europea se estableció en el sur de la isla São Tomé una plantación de palma aceitera en 650 hectáreas y una fábrica de aceite de palma (Empresa de Óleos Vegetais - EMOLVE).

EMOLVE finalmente dejó el negocio, pero en 2009 llegó a la isla la empresa belga-francesa Socfinco, registrada localmente como Agripalma, que es parte del poderoso grupo inversionista Bolloré, con sede en Francia.

Socfinco tenía como proyecto la producción de aceite de palma para la fabricación de agrocombustibles en Bélgica, para lo cual planeaba plantar unas 5.000 hectáreas entre Príncipe y São Tomé.

En 2009, el Estado realizó la concesión de esas tierras a la empresa Agripalma, pero la población de Príncipe, según registra la publicación local Téla Nón, rechazó el acuerdo e impidió que el

establecimiento de plantaciones industriales de palma en su isla destruyera más de 1.000 hectáreas de bosques.

En São Tomé, en cambio, el acuerdo prosperó, e incluso el gobierno procuró conseguir más tierras en esta isla como forma de compensar las 1.000 hectáreas negadas en Príncipe y así dar cumplimiento al acuerdo con Agripalma.

Fue así que los habitantes de São Tomé comenzaron a ver a camiones retroexcavadores avanzando sobre los bosques prístinos de la región sur de la isla, donde la naturaleza exuberante, alimentada por varios ríos y riachuelos, se despliega en la mayor cuenca hidrográfica del país.

Las retroexcavadoras de Agripalma afectan también la base alimentaria de la población local, que gira en torno al coco, cultivo que comenzó a escasear. “Nuestros padres y abuelos cultivaban aquí. Lo cierto es que ahora nos arrebataron todas las tierras para que Agripalma plantara palmeras. El coco es una de las cosas que garantiza nuestra alimentación aquí, y van a destruir todos los cocoteros. ¿Qué vida tendremos?”, reflexionaba un joven de la aldea de Monte Mário.

“El gobierno decidió que al país le convenía más cambiar toda su biodiversidad, única en el mundo, por unas cuantas toneladas de aceite...!”, fue una de las protestas que comenzaron a levantarse a medida que avanzaba la devastación.

Fue así que algunos habitantes de São Tomé comenzaron a movilizarse para luchar contra lo que consideran un crimen ambiental de Agripalma, presentando ante la justicia una medida cautelar contra el avance de los caterpillars y motosierras de la empresa en los bosques del sur de la isla, más concretamente en la zona del parque natural de Obo.

A fines de julio pasado, el tribunal se expidió dando lugar la demanda y estableciendo restricciones a las actividades de la empresa Agripalma, tales como que se abstenga de deforestar en las proximidades del parque natural Obo, los cerros, las zonas costeras y otras que puedan poner en peligro o destruir la flora y fauna protegidas. La jueza que expidió el fallo dispone también que Agripalma debe dejar 40 metros en cada margen de río, riachuelos o lagunas, lo cual deja a la empresa en infracción ya que, según registró Téla Nón, prácticamente sobre las márgenes del río Caué existe una vasta superficie deforestada donde ya plantaron varios centenares de palmeras. También devastada para la plantación de palmeras está la colina próxima a dicho río.

El tribunal advirtió que el proyecto de Agripalma debe ser redimensionado a una superficie que no afecte la reserva, lo cual deja prácticamente inoperante el proyecto ante la falta de tierras que cumplan ese requisito y a la vez sirvan a la empresa.

Si bien la decisión judicial no suspendió las actividades de Agripalma, estableció una serie de limitaciones que las frena y que para el grupo civil que se movilizó ante el avance de las plantaciones de palma, significa un logro. Ante todo, el fallo demuestra que es en la voluntad popular organizada donde radica la fuerza para hacer frente a la destrucción.

Basado en información de: “Tribunal mostra sinal de STOP à empresa Agripalma”, agosto de 2013, Abel Veiga, Diario Digital de São Tomé e Príncipe -TÉLA NÓN, <http://www.telanon.info/sociedade/2013/08/12/14103/tribunal-mostra-sinal-de-stop-a-empresa-agripalma/>; “Sociedade civil denuncia crime ambiental na zona sul de São Tomé”, Abel Veiga, Diario Digital de São Tomé e Príncipe -TÉLA NÓN, <http://www.telanon.info/sociedade/2013/06/04/13409/sociedade-civil-denuncia-crime-ambiental-na-zona-sul-de-sao-tome/>

- Sudáfrica: la expansión de la industria celulósica y el acaparamiento de tierras disfrazado de desarrollo comunitario



Durante el Apartheid, muchos sudafricanos fueron despojados de sus tierras tradicionales por medio de leyes que provocaron su desplazamiento – a menudo por la fuerza – hacia zonas más pequeñas y remotas con un potencial agrícola marginal. Al mismo tiempo, el gobierno sudafricano de la época se apresuraba a convertir las tierras que arrebató a las comunidades rurales en vastas plantaciones industriales de árboles exóticos con el fin de respaldar a la industria celulósica y papelera, lo cual permitiría disminuir la dependencia de productos importados y el riesgo de sanciones de tipo comercial.

Para ejecutar dicho plan, se creó una compañía estatal llamada SAPPI (South African Pulp and Paper Industries). Si bien luego fue privatizada, el gobierno sudafricano continúa manteniendo una considerable participación en ella a través de la IDC (Industrial Development Corporation). La compañía, que ahora se denomina Sappi Ltd., tiene varias filiales y se ha convertido en una enorme empresa multinacional, propietaria de grandes bienes en tierras y equipamiento en todo el mundo.

En los últimos tiempos, Sappi ha comenzado a abandonar la producción de papel para concentrarse en la fabricación de celulosa química, para la cual parece haber un crecimiento potencial de la demanda, principalmente en China. Con miras a captar una tajada de este nuevo mercado, Sappi se ha embarcado en un importante proceso de transformación que incluye la venta o el cierre de algunas de sus fábricas más pequeñas o antiguas, las cuales causaron grandes problemas de salud en las zonas donde estaban ubicadas, además de dejar un legado de suelos y agua contaminados.

Parte de este proceso implica ampliar dos grandes fábricas en Sudáfrica y una en Estados Unidos, y transformarlas para que produzcan celulosa química, lo cual requerirá un mayor suministro de materia prima barata bajo la forma de troncos de eucalipto. En Sudáfrica, la fábrica de Sappi ubicada en Nogdwana, provincia de Mpumalanga, ha sido convertida y considerablemente ampliada, y requerirá ahora mucha más madera de eucalipto. Esto significa que, además de crear nuevas plantaciones de eucaliptos, habrá que convertir las plantaciones de pinos existentes, lo cual tendrá impactos ambientales mucho peores, especialmente en lo referente al consumo de agua y al carácter invasor del eucalipto.

También ha sido considerablemente ampliada la fábrica de celulosa Saiccor de Sappi, situada en Umkomaas, provincia de KwaZulu-Natal: su capacidad de producción es ahora de casi un millón de toneladas por año. Esto ha llevado a Sappi a emprender una campaña agresiva para obtener más madera de fuentes cercanas.

Como principio general, para que el emprendimiento sea rentable desde el punto de vista del transporte, es necesario obtener la madera a no más de 250 km de distancia de la fábrica. Por este motivo, se ha previsto destinar grandes extensiones de tierras de las comunidades locales que se encuentran dentro de la “zona de influencia” de la fábrica, para el establecimiento de nuevas plantaciones.

La plantación de Sandanezwe (casualmente, éste es también el nombre de un yuyo invasor, *Chromolaena odorata*), en la región de Ingwe, es uno de esos proyectos, y ocupará 405 ha de tierras comunitarias que figuran en la lista gubernamental de concesiones para nuevas plantaciones en la “zona de influencia” de Umkomaas. Sappi y el gobierno han llevado adelante proyectos como éste por medio de consultoras en “desarrollo comunitario” como Awethu Forestry Investments (Pty) Ltd. y de ONGs como LIMA, fuertemente asociadas a la industria maderera.

Para dichos proyectos se crearon concesiones especiales, basándose en el argumento de que la comunidad local había pedido permiso para la plantación, cuando, en realidad, fue la propia Sappi, actuando entre bambalinas y desinformando a los líderes locales, quien presentó al gobierno las solicitudes de autorización. Se pone énfasis en los supuestos beneficios financieros de las plantaciones, pero se omite mencionar los negativos impactos ambientales y sociales, por los cuales deberán pagar los habitantes y las generaciones futuras que perderán sus derechos sobre las tierras y el agua.

Wally Menne, Coalición Timberwatch, correo electrónico: [plantnet@iafrica.com](mailto:plantnet@iafrica.com)

[inicio](#)

---

- Brasil: el monocultivo de eucalipto en el sudoeste bahiano - conflictos y enfrentamientos



El campo brasileño, desde la época de la colonización, siempre fue un espacio de apropiación del capital, a partir de una lógica de acumulación de riqueza y beneficios, y con el Estado brasileño como mediador del mantenimiento del orden capitalista mundial. Dicha lógica - incentivada por las Empresas de Asistencia Técnica y Créditos Bancarios o por la participación activa de empresas

multinacionales - se manifiesta en la apropiación de la naturaleza que es transformada en mercadería y que concentra cada vez más el espacio rural, principalmente.

Más recientemente en el estado de Bahía, con la creación de Odebrecht Perfurações Ltda. en 1979 y del Polo Petroquímico de Camaçari, se hicieron abultadas inversiones en la producción de papel y celulosa en áreas del litoral del norte bahiano. En este mercado industrial interno, el estado brasileño construye las bases para la expansión del cultivo de eucalipto, ampliando esta producción hacia el sur y el extremo sur bahiano. Éste es el marco en el que se construye la BR 101 que une dos metrópolis, Vitória en el estado de Espírito Santo y Salvador en el estado de Bahía, para facilitar y viabilizar el proceso de ocupación y explotación de plantíos de eucalipto en la región. Con esta estrategia de expansión, la región del sudoeste bahiano es la “protagonista del momento”.

El interés por el agronegocio forestal en la región del sudoeste de Bahía data del período de la crisis del monocultivo de café, que comenzó en los últimos años de la década de los 80 y se profundizó en los años 90 con la caída del precio del costal y la disminución de la superficie plantada en la región “Planalto da Conquista”. Es importante observar que es en este período que se registra el mayor número de ocupaciones de tierra, más de 20 solo entre los años 1986 y 2000, siendo la primera en la hacienda del ex Instituto Brasileño del Café (IBC), hoy Asentamiento União.

De esta forma, después de la fase ganadera y cafetera surge una nueva etapa de inversiones del capital agrario en el sudoeste de Bahía, en el cultivo de eucalipto. Importa destacar, que a diferencia del sur y el extremo sur de Bahía, en el “Planalto da Conquista” el eucalipto se usa principalmente para abastecer de carbón al polo siderúrgico del norte de Minas Gerais, y además suministra leña para la producción de cerámicas y madera tratada para diversas actividades agrícolas, industriales y de la construcción civil.

En este contexto, productores rurales y empresarios del sector forestal, apoyados por instituciones públicas de enseñanza, investigación y extensión como EMBRAPA Florestas y la UESB, buscan en el agronegocio forestal oportunidades de inversión y de ganancias rápidas. Importa destacar en este período el papel fundamental que tuvo la UESB (Universidad Estadual de Bahía) al fortalecer la concepción del agronegocio forestal que, como consecuencia, incentivó el monocultivo de eucalipto. A partir de dos simposios realizados en 1992 y 2005, estas discusiones se extendieron a varias intendencias municipales y productores de la región.

En dirección contraria, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y sectores de la sociedad civil comenzaron a movilizarse bajo un lema colectivo de enfrentamiento al plantío extensivo de eucalipto, de protección al medio ambiente y de búsqueda de alternativas sustentables.

En este marco surgen el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), la Cooperativa Mixta Agropecuaria de Pequeños Agricultores del Sudoeste de Bahía (COOPASUB), el Centro de Convivencia y Desarrollo Agroecológico del Sudoeste de Bahía (CEDASB), el Instituto “Mata de Cipó” y, más recientemente, el Foro de Entidades y Movimientos Sociales del Sudoeste de Bahía. Todos ellos comparten la búsqueda de alternativas socioambientales sustentables para la región y, para muchos, esto se traduce en la lucha explícita contra el agronegocio forestal.

De esta forma, al barullo de las cadenas de los tractores que derriban lo que queda del bosque de lianas, se contraponen el grito “¡No comemos papel, ni carbón!”. Un grito de alerta y de lucha que promovió la unión, simbólica y real, de las banderas del Movimiento de los Trabajadores y

Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Trabajadores Desempleados (MTD), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Centro de Estudios y Acción Social (CEAS), además de los ya citados movimientos y entidades, en el I Seminario Regional contra el Monocultivo de Eucalipto en el año 2001.

En dicho seminario se trazó la estrategia de anticiparse al agronegocio forestal, con la ocupación de latifundios que servirían a nuevos plantíos de eucaliptos, y además se realizaron seminarios locales para discutir, con las comunidades afectadas, el tema del monocultivo de eucalipto y sus consecuencias para la salud y el medio ambiente. Otro evento importante fue el intercambio realizado en la comunidad “geraiseira” en la localidad de Rio Pardo de Minas, al norte de Minas Gerais, en 2002, cuando la comunidad trababa una férrea lucha contra la empresa Minas Floresta para la reconquista y la demarcación de sus territorios ancestrales. En 2004, otro intercambio con el Centro de Agricultura Alternativa del Norte de Minas (CAA) y con los Pueblos del Cerrado estrechaba la unión entre el Norte de Minas Gerais y el Sudoeste de Bahía en el enfrentamiento al eucalipto y en la búsqueda de alternativas sustentables desde la perspectiva social, cultural, económica y ambiental.

La ciudad de Vitória da Conquista, polo de la región sudoeste, afectada directa e indirectamente por la expansión de Veracel, ya está fuertemente afectada por la expansión del monocultivo de eucalipto, estimulada por el polo siderúrgico de Betim (MG), que a su vez está interesado en la madera para la producción de carbón. En dicha localidad ya llegan a cerca de 35 mil hectáreas de eucaliptos plantados, y se estima que existan otras 15 mil en Encruzilhada, y más de 20 mil en las localidades de Barra do Choça, Cordeiros, Piripá, Cândido Sales, Planalto y Poções, localizados todos en el Planalto da Conquista. Se calcula que en todo el estado de Bahía hay unas 658 mil há de plantaciones, caracterizándose así como el 3er mayor productor de superficies plantadas de eucalipto del país. De ese total, se estima que el 70% se encuentra en el sur y el extremo sur de Bahía.

Estos seminarios y la trayectoria colectiva de las entidades y movimientos sociales relacionados con esta problemática provocaron la creación en 2011 de un ambiente de discusión y reacción frente a estos proyectos del agronegocio, denominado Foro de Entidades y Movimientos Sociales del Sudoeste Bahiano.

La aproximación del Foro de Entidades y Movimientos Sociales del Sudoeste con otros grupos de amplia trayectoria de enfrentamiento al monocultivo de eucalipto en el sur y extremo sur del estado - como el Foro Socioambiental del Extremo Sur y el Foro por Trabajo, Tierra, Empleo y Ciudadanía del Sur de Bahía - tuvo inicio en 2011, con la preparación conjunta y actuación coordinada en las Audiencias Públicas del Proceso de Licencias Ambientales del proyecto de expansión de Veracel, que prevé un total de 50.900 hectáreas para plantación y 101.800 ha para adquisición (ver cuadro abajo). Ello contribuyó a acumular fuerzas y a aportar un cambio cualitativo en el enfrentamiento de los grupos ante estos proyectos en la región Sudoeste.

MUNICIPIO	ÁREA PRETENDIDA POR VERACEL (hectáreas)	
	PARA PLANTÍO (ha)	PARA ADQUISICIÓN*(ha)
Encruzilhada	4.000	8.000
Itapetinga	10.000	20.000
Macarani	10.000	20.000

Maiquinique	4.000	8.000
Itarantim	17.900	35.800
Potiraguá	5.000	10.000
TOTAL	50.900	101.800
(*) Veracel solo informa el área pretendida para plantío efectivo. El área de adquisición es una estimativa a partir de datos del EIA-RIMA.		

Frente a esta amenaza, se hace necesaria la movilización de la sociedad civil para imponer límites a las acciones de las corporaciones, resguardar los intereses colectivos y la defensa del medio ambiente. En este sentido, el CEAS y la CPT, junto a grupos y entidades de las localidades de Maiquinice, Itarantim, Barra do Choça y Cordeiros, elaboraron Leyes de Iniciativa Popular, para no solo restringir los plantíos de plantas exóticas sino también para crear códigos municipales ambientales que regulen todas las acciones ambientales en dichas localidades.

En 2012 se realizó el I Seminario Regional del Monocultivo de Eucalipto, en la localidad de Vitória da Conquista, que contó con relatos de las experiencias de enfrentamiento de las organizaciones del sur y extremo sur del Estado de Bahía, como CEPEDS (Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía) y de las organizaciones del norte de Minas, como el MAB (Movimiento de los Afectados por las Represas); con las experiencias de la elaboración de las Leyes de Iniciativa Popular en el sudoeste Bahiano y también con sectores importantes de la Universidad, como el Proyecto Geografar/ UFBA y los estudiantes de la UESB, con Promotores Públicos federales y estaduais y con diversas organizaciones sociales del Planalto da Conquista, que fortalecieron las articulaciones y desarrollaron una agenda común de enfrentamiento.

Actualmente, las localidades de Itarantim, Maiquinique y Barra do Choça ya aprobaron sus leyes y están en la fase de consolidación y fortalecimiento de los Consejos de Defensa del Medio Ambiente, para que sea posible realizar el control popular y evaluar sus propuestas en relación a la gestión ambiental y territorial.

Estas iniciativas se presentaron como alternativas contra la expansión del eucalipto en la región, además de originar beneficios como el involucramiento popular y el fortalecimiento y en otros casos la creación de consejos de defensa del medio ambiente para que se hagan efectivos los derechos individuales y colectivos de las poblaciones locales.

Estas experiencias en el sudoeste bahiano hacen nacer otras plantas además de los eucaliptos, alimentando a los grupos con conocimiento y con un proceso organizado de lucha, desorganizando el orden del agronegocio en la región.

Por: Maicon Leopoldino de Andrade, cursando Master en Geografía (POSGEO/UFBA); Daniel Piccoli, Colaborador del Centro de Estudios e Acción Social (CEAS) y Miembro del Fórum de Entidades y Movimientos Sociales del Sudoeste Bahiano; Gilca Garcia de Oliveira, Doctora en Economía Rural y Profesora del Programa de Posgrado en Geografía y de la Maestría en Economía (UFBA); Guiomar Inez Germani, Doctora en Geografía y Profesora del Programa de Posgrado en Geografía (POSGEO/UFBA).

inicio





En numerosos países de Asia, África y América Latina los millones de hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera van en aumento, con una historia bien documentada de deforestación tropical - incluso con enormes incendios - y un triste saldo de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo , los poderosos intereses detrás de este negocio continúan promoviendo activamente este cultivo , en un contexto de creciente oposición a nivel local.

Fue en este contexto que se creó la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO). La RSPO es un foro de partes interesadas que proporciona la certificación voluntaria de la gestión de las plantaciones de palma aceitera y de plantas de procesamiento de aceite de palma , y cuya gran mayoría de miembros representa a intereses industriales como Nestlé, Unilever y Rabobank - todos vinculados a casos de acaparamiento de tierras en Asia, América Latina y África.

En efecto , la RSPO actúa como mecanismo de "maquilave verde" , con el objetivo de garantizar a los consumidores que el aceite de palma que consumen en alimentos , jabones , cosméticos o combustible, se ha producido de manera "sostenible", a pesar de los cientos de conflictos que sus plantaciones han creado con las comunidades locales allí donde se hayan establecido. La RSPO quiere certificar la incertificable , tratando de ocultar la insostenibilidad inherente a monocultivos de palma aceitera en gran escala. La etiqueta de " sostenibilidad " se utiliza para ocultar los graves impactos sociales y ambientales de las plantaciones industriales de palma aceitera sobre las comunidades y los medios de vida locales.

Enfrentando a la RSPO en Honduras

Del 6 al 8 de agosto se celebró en Honduras IV Conferencia Latino Americana de la RSPO - Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federación de Industriales Productores de Palma de Aceite. Las grandes ONGs World Wildlife Fund (WWF) y otras tres grandes, también participan en la RSPO.

Activistas ambientales y sociales quedaron indignados al saber que uno de los patrocinadores del evento era la empresa de aceite de palma Corporación Dinant , de propiedad de Miguel Facussé , el mayor terrateniente de Honduras . Facussé, uno de los tres mayores productores de palma aceitera, ha estado vinculado con el asesinato selectivo de más de 88 miembros y simpatizantes de organizaciones campesinas, ocurrido desde junio de 2009 en el Valle del Aguán, una de las principales regiones productoras de aceite de palma en Honduras .

Con motivo de la Conferencia Latinoamericana de la RSPO, el WRM publicó un comunicado de

prensa denunciando que “sellos como RSPO debilitan a las comunidades que defienden sus territorios y bosques y luchan contra su expansión. Dificultan la urgente necesidad de construir modelos diferentes de producción y consumo en los que se prescindan de un consumo cada vez mayor de aceite de palma y de otros productos y materias primas tal como ocurre en la lógica del actual modelo de producción corporativo y centralizado, que domina los mercados mundiales y patrones de consumo, y que está destruyendo el planeta.” Ver : RSPO: “maquillaje verde” a las plantaciones de monocultivos de palma aceitera , en [http://wrm.org.uy/oldsite/plantaciones/RSPO\\_maquillaje\\_verde.html](http://wrm.org.uy/oldsite/plantaciones/RSPO_maquillaje_verde.html)

Además, las organizaciones el internacional Rights Action, Salva la Selva , Biofuelwatch y Food First condenaron en un comunicado de prensa la Conferencia Latinoamericana. Piden al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF ) y otras tres grandes organizaciones no gubernamentales que se retiren de la conferencia que se celebra en Honduras . Ver “Expanding palm oil empires in the name of ‘green energy’ and ‘sustainable development’”, <http://www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/RSPO-Honduras-PR.pdf>

Como una manera de denunciar la conferencia latinoamericana de la RSPO , la organización sindical Rel -UITA entrevistó a Gilberto Ríos y Alba Ochoa, de FIAN Honduras, quienes afirmaron que la conferencia es una farsa, ya que sus objetivos reales no tienen nada que ver con la sostenibilidad y la responsabilidad y mucho menos con la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la soberanía alimentaria . Ellos aseguran que los objetivos de la RSPO son meramente comerciales y la conferencia es sólo una herramienta para expandir su comercio. Ver " RSPO: La farsa del aceite de palma sostenible. Certificaciones, negocios y lavado de imagen para empresarios palmeros" , en <http://www.rel-uita.org/index.php/es/derechos-humanos/item/3618-rspo-la-farsa-del-aceite-de-palma-sostenible>

Enfrentando a la RSPO en Alemania: rasqueteando la fachada verde

Activistas de organizaciones ambientalistas y por los derechos humanos manifestaron contra el maquillaje verde que la RSPO ofrece a las plantaciones de palma aceitera a gran escala, durante dos encuentros de alto perfil realizados el 2 y 3 de setiembre en Berlín, Alemania. El 2 de setiembre, los participantes que llegaban para el lanzamiento del denominado “Foro para el aceite de palma sostenible” fueron recibidos por activistas equipados con cepillos, baldes y disolvente, ocupados en eliminar la capa de barniz verde suministrada por el programa de certificación, con el fin de denunciar la falta de sostenibilidad y la destrucción incesante que caracterizan a la producción de aceite de palma, certificada o no. El 3 de setiembre, los activistas siguieron rasqueteando durante la reunión europea de la “Mesa Redonda del Aceite de Palma Sostenible”, RSPO, que tenía lugar en el hotel Estrel de Berlín.

En esta acción conjunta, Watch Indonesia, Urgewald, Robin Wood, Salva la Selva y la Sociedad para los Pueblos Amenazados demostraron que “el aceite de palma barato sale caro”. Los activistas de Indonesia explicaron que ese alto precio lo pagan las personas a las que se les roba la tierra y la subsistencia, y los bosques que siguen siendo destruidos a medida que avanzan las plantaciones de palma aceitera. Exhortaron al gobierno alemán a detener la importación del destructivo aceite de palma, en lugar de organizar un nuevo foro para maquillarlo de verde. “El gobierno alemán favorece al lobby del aceite de palma. Las violaciones de derechos humanos están indisolublemente ligadas al aceite de palma en Indonesia y en Malasia, donde se produce el 90% del aceite de palma del mundo”, declararon las organizaciones en un comunicado de prensa conjunto. Por más información, ver <http://urgewald.org/artikel/protest-gegen-palmoel>

- Brasil: los incentivos del gobierno estadual a la expansión del monocultivo de árboles en el estado de Río de Janeiro



El gobierno del estado de Río de Janeiro ha adoptado, desde 2001, diversas iniciativas para estimular la expansión de los monocultivos de árboles en gran escala en el territorio del estado. Según parece, su intención es repetir en Río de Janeiro los desiertos verdes que asolan el norte de los estados de Espírito Santo, el extremo sur de Bahía, el norte de Minas Gerais, San Pablo, Paraná, el sur de Río Grande del Sur, y, más recientemente, diversas zonas de los estados de Maranhão, Piauí y Mato Grosso del Sur.

En 2001, el gobierno estadual y la corporación Aracruz Celulose (hoy Fibria) firmaron un protocolo de intenciones según el cual el gobierno se comprometía a apoyar el plantío extensivo de árboles para abastecer a la fábrica de la empresa en el estado de Espírito Santo. A partir de entonces, Aracruz Celulose inició una agresiva campaña ante los gobiernos municipales de las regiones norte y noroeste del estado. Como resultado, diversos intendentes asumieron compromisos públicos de asignación de áreas para plantíos de eucalipto de Aracruz Celulose en sus municipios.

La firma de un protocolo de intenciones provocó la reacción inmediata de los movimientos sociales, reunidos en la Red Alerta Contra el Desierto Verde de Río de Janeiro, que se manifestaron para hacer públicos los graves impactos socioambientales causados por la silvicultura industrial en los estados de Espírito Santo, Bahía y Minas Gerais. La resistencia popular logró cancelar el Protocolo de Intenciones así como aprobar la ley estadual 4063, en 2003, que imponía restricciones a la silvicultura. Sin embargo, a pesar de toda la movilización, el gobierno del estado aprobó, en 2007, la ley 5067, que flexibilizó las reglas para la expansión de la forestación industrial, facilitando el plantío de monocultivos de árboles en 90 de los 92 municipios del estado. El proyecto de ley que originó la ley 5067/2007 fue enviado por el gobernador del estado a la asamblea legislativa con carácter de urgente, y, por lo tanto, se hizo la votación sin el necesario debate previo, pero con todo el apoyo del entonces secretario estadual de Medio Ambiente, Carlos Minc. Esta ley vinculó la realización de la zonificación ecológica-económica del estado a la silvicultura, y descartó la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental para superficies inferiores a 400 hectáreas en las regiones norte y noroeste del estado. Con esto incumplió la Constitución Federal, que obliga que la realización de emprendimientos que provocan impactos sea precedida de evaluaciones ambientales. A partir de ese momento, la silvicultura pasó a ser una política estratégica del gobierno estadual, garantizada por una legislación propia. En consecuencia, más

del 65% de las plantaciones de eucalipto en la región noroeste del estado se establecieron después de la promulgación de la ley 5067/2007, y en su mayoría sin que se cumplieran las exigencias ambientales comprendidas en esta ley.

La crisis financiera de 2008, sin embargo, desaceleró la expansión del monocultivo de árboles en gran escala en el estado. Con la intención de retomarla, el gobierno estadual lanzó en 2011 el Plan Básico para el Desarrollo de la Silvicultura Sustentable, en una alianza inusitada con Petrobras, la mayor empresa brasileña de petróleo y gas. La participación de Petrobras en el proyecto, según el texto introductorio del documento, tendría el objetivo de intentar compensar los impactos socioambientales de sus actividades en el estado. El Plan previó que la silvicultura comercial podrían ocupar 1,5 millón de hectáreas de tierras en el estado, aproximadamente el 35% del territorio estadual. El discurso del gobierno estadual para llevar a cabo el Plan se basó en promesas de trabajo e ingresos, y que supuestamente contribuiría a la inclusión social, la recuperación de zonas degradadas por pasturas y la absorción de CO<sub>2</sub>, además de la recuperación de parte del bosque nativo, que se limitaría a apenas 11% de las áreas plantadas con monocultivos de eucalipto.

No obstante, todos estos incentivos parecen no ser suficientes. A pesar de la flexibilización, la legislación estadual que regula la silvicultura económica aún es compleja según algunos representantes del sector, pues exige la regularización de las plantaciones ante el Instituto Estadual del Ambiente. Por ello, el secretario de Medio Ambiente, Carlos Minc, informó recientemente que el gobierno estadual promulgará un decreto que facilitará aún más la concesión de licencias ambientales a las plantaciones comerciales, a través de la creación de “distritos forestales” - grandes áreas formadas por propiedades menores -, que no necesitarán estudios de impacto ambiental individuales. Se procura plantar 100 mil hectáreas de monocultivos de árboles en los próximos cinco años, en las regiones sur, norte y noroeste del estado, “contribuyendo a las exportaciones del país y al aumento en la recaudación de impuestos”. Hoy, en el estado de Río de Janeiro, existen unas 18 mil hectáreas de monocultivos de árboles. La baja producción local de madera es el gran argumento para los incentivos gubernamentales al sector. El estado importa cerca del 90% de madera consumida por las industrias, siendo uno de los principales consumidores de productos de base forestal del país. Del total consumido, 29% es leña que se quema para la generación de energía en las industrias, y 23% se emplea en la construcción civil, según la Federación de las Industrias del estado de Río de Janeiro (Firjan). La producción local de madera reduciría la actual dependencia de productos forestales provenientes de Bahía, Espírito Santo, San Pablo y Minas Gerais.

El estado de Río de Janeiro ya figura como frontera de expansión del monocultivo de árboles en Brasil. Ante la flexibilización de la legislación estadual que regula la actividad, el establecimiento de siderúrgicas en el estado, consumidoras de carbón vegetal, y la ejecución del Plan Básico para el Desarrollo de la Silvicultura Sustentable, vinculado a la posibilidad de comercialización con la operación de complejos portuarios como los de Açu y Kennedy, la tendencia es a la expansión de cadenas productivas ligadas al monocultivo del eucalipto en el estado. A ello se suma la cooptación política de representantes del poder público municipal en el estado, de la sociedad civil y de funcionarios públicos involucrados con la extensión rural.

Ante lo expuesto, es evidente que los procesos decisorios adoptados por el gobierno estadual de Río de Janeiro excluyeron la participación y los intereses de los principales afectados por este modelo de desarrollo basado en el monocultivo de árboles: las pequeñas comunidades rurales. El estímulo del gobierno a la silvicultura industrial no se evaluó en relación a alternativas como la

reforma agraria y la agroecología. Estas propuestas no fueron siquiera discutidas en escala local como modelo de desarrollo para el espacio agrario del estado de Rio de Janeiro. Pero la situación es aún más grave: según el INCRA - entidad gubernamental de soporte a las acciones de reforma agraria - las áreas preferenciales indicadas por el gobierno estadual y sus aliados privados para la expansión del monocultivo de árboles serían exactamente las zonas donde hay conflicto social en el campo y lucha popular por reforma agraria.

Referencias:

A expansão da monocultura de eucalipto no Noroeste Fluminense e seu potencial para a geração de conflitos socioambientais, Filipe Correia Duarte, 2012.

<http://www.slideshare.net/ceaong/dissertao-filipe-duarte-verso-final>

Plano Básico da Silvicultura Sustentável para as Regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro

<http://www.rj.gov.br/web/seplag/exibeconteudo?article-id=455158>.

Em busca de novas florestas, 19/02/2013 <<http://oglobo.globo.com/amanha/em-busca-de-novas-florestas-7615691>>.

Estado do Rio vai facilitar licenciamento ambiental para silvicultura, 25/04/2013

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-25/estado-do-rio-va>

[i-facilitar-licenciamento-ambiental-para-silvicultura](http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-25/estado-do-rio-va-i-facilitar-licenciamento-ambiental-para-silvicultura)>.

Setor florestal também se volta para o Rio de Janeiro, 21/04/2013

<http://www.painelflorestal.com.br/noticias/brasil/setor-florestal-tambem-se-volta-para-o-rio-de-janeiro>>.

Por Marina Castro – Red Alerta Contra el Desierto Verde del estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro/Brasil, correo electrónico: [marinaeea@yahoo.com.br](mailto:marinaeea@yahoo.com.br)

[inicio](#)

---

- Guatemala: el avance silencioso de los monocultivos de caucho



El árbol de caucho, también conocido como hule, pertenece al género *Hevea* y es originario de América del Sur. Dentro de las especies de este género la *Hevea brasiliensis* es la que comúnmente se explota de manera industrial.

El cultivo de caucho se introdujo en Guatemala en 1940 por iniciativa del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América. Quince años más tarde, un primer censo de las plantaciones en el país reportó alrededor de 10.000 hectáreas. En 2003, el cultivo creció a

52.000 hectáreas; en 2012, más de 100.000 hectáreas plantadas de caucho se localizan principalmente en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez, en la Costa Sur de Guatemala, de las cuales 55.000 hectáreas están con árboles en fase de producción y las 45.000 restantes con árboles en crecimiento.

Según el mapa “Áreas aptas para el desarrollo del cultivo de Hule”, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala, se considera que el país tiene más de 400.000 hectáreas aptas para el cultivo de caucho natural. Estas zonas se localizan en la Franja Transversal del Norte y la Costa Sur del país, así como en zonas del departamento de Izabal y Alta Verapaz. Sin embargo, el crecimiento de las plantaciones de hule basado en estas proyecciones debe ser asunto de análisis y reflexión, principalmente por la posible competencia y acaparamiento de las tierras que puede generar el crecimiento de este monocultivo forestal, en un país con una elevada conflictividad por el acceso y la tenencia de la tierra.

Un concepto equivocado que desde ya manejan los impulsores del caucho, es considerarlo como un “bosque” artificial, aún cuando una plantación de árboles no puede compararse con la riqueza biológica ni con la compleja dinámica de los bosques. En la mayoría de los casos las plantaciones se establecen respondiendo a una lógica de mercado, por lo cual la vida de estas plantaciones también está regulada por los precios y las demandas internacionales.

Guatemala es uno de los principales exportadores y productores de caucho natural del continente americano. El impacto ambiental y social que podría generar el crecimiento de plantaciones de caucho es otro factor a considerar si las áreas a plantar cuentan con cobertura boscosa, que corre el riesgo de ser destruida, ya que en la fase de preparación del terreno para sembrar caucho se “deben eliminar árboles y arbustos ya que el crecimiento del Hevea requiere exposición a plena luz solar...”, como lo cita la Asociación Nacional de Café en su documento Cultivo de Hule (2004).

El cultivo de caucho también trata de sacar ventaja del mercado de carbono, donde estas plantaciones podrían vender “créditos” por el carbono que absorben y almacenan, generando una oportunidad más de negocio para los dueños de las plantaciones de hule. Pero este mecanismo de índole comercial es cuestionado por los grupos ecologistas porque no brinda una solución genuina a la crisis climática que propicie los cambios necesarios en la forma contaminante de producción de las empresas.

En 2010 se anunció la primera venta a escala internacional de créditos de carbono en plantaciones de árboles de caucho natural por la empresa guatemalteca Grupo Agroindustrial de Occidente (GAO), proyecto que consiste en establecer 2.500 nuevas hectáreas de plantaciones de árbol de hule. Según El Periódico (10 de junio de 2010) este acuerdo de compra de “reducción de emisiones verificadas” se firmó entre la compañía suiza FirstClimate y Pica de Hule Natural, S. A., una empresa de GAO. El acuerdo se firmó en el marco de la Feria y Conferencia Mundial Carbón Expo, que se realizó ese año en la ciudad de Colonia, Alemania. La negociación le permitirá al grupo guatemalteco acceder a fuentes de financiamiento provenientes de incentivos internacionales que impulsan la reforestación y aducen “contribuirá a la reducción del cambio climático”, según cita la nota de El Periódico.

Bajo esta dinámica preocupan los impactos sociales y ambientales que pueda generar un crecimiento de miles de hectáreas del monocultivo, y que el país continúe apostando a un modelo basado en la utilización de las tierras para la producción con fines de exportación, en contraposición a otras formas ambientalmente más justas basadas en el beneficio de la economía campesina, la diversificación de los cultivos, la agroecología.

Carlos Salvatierra, SAVIA, putno focal de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) en Guatemala, correo electrónico: [salvatierraleal@gmail.com](mailto:salvatierraleal@gmail.com)

[inicio](#)

## RECOMENDADOS

- “Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análise dos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará”, una publicación del Centro de Control de Agrocombustibles de la ONG Repórter Brasil, <http://reporterbrasil.org.br/agrocombustiveis/exibe.php?id=213>

[inicio](#)

- 
- "Agribusiness large-scale land acquisitions and human rights in Southeast Asia - Updates from Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-Leste and Burma", Forest Peoples Programme, agosto 2013, <http://www.forestpeoples.org/region/burma/publication/2013/agribusiness-large-scale-land-acquisitions-and-human-rights-southeast>

[inicio](#)

- 
- “Who is benefitting ? The Social and economic impact of three large scale land investments in Sierra Leone: a cost benefit analysis”, informe encomendado por Action for Large-scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) con el apoyo de Christian Aid (UK), Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO, The Netherlands), Catholic Organisation for Relief and Development AID (Cordaid, The Netherlands) y Bread for All (Development Service of the Protestant Churches in Switzerland), julio de 2013, <http://www.christianaid.org.uk/images/who-is-benefitting-Sierra-Leone-report.pdf>